



BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

V LEGISLATURA

Serie A:
PROYECTOS DE LEY

21 de marzo de 1995

Núm. 76-11

INFORME DE LA PONENCIA

121/000061 Modernización de las explotaciones agrarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES del informe emitido por la Ponencia sobre el Proyecto de ley de Modernización de las explotaciones agrarias (Expediente 121/61).

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 1995.—P. D., El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Ignacio Astarloa Huarte-Mendi-coa**.

A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca

La Ponencia encargada de redactar el Informe sobre el Proyecto de ley de Modernización de las explotaciones agrarias (Expte. 121/61) que, a propuesta del propio grupo proponente, se tramita conjuntamente con la proposición de ley de incentivos fiscales a la ampliación y a la continuidad de las explotaciones familiares agrarias (nº de expte.: 122/16), integrada por los Diputados, Don Josep Pau i Pernau (S), Don Gerardo Torres Sahuquillo (S), Don Francisco San Martín Sala (P), Don José Ramón Pascual Monzo (P), Don Miguel Ramírez González (P), Doña Mercé Rivadulla Gracia (IU-IC), Don Pere Vidal i Sardo (C-CiU) y Don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida (V-PNV), ha estudiado con todo detenimiento dicha iniciativa, así como las enmiendas presentadas, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113 del Reglamento elevan a la Comisión el siguiente:

INFORME

Exposición de Motivos

Se han presentado dos enmiendas, las números 48 y 49. Se retira la primera de ellas por cuanto se suprime en el párrafo tercero del apartado I la expresión «con éxito», rechazándose la número 49.

Se incorporan asimismo las propuestas que se incluían en la Nota del Letrado; de este modo, los encabezamientos de los distintos apartados de la exposición de motivos habrán de figurar con números romanos en lugar de números arábigos; en el párrafo tercero del apartado 4, donde dice: «Por lo que lo respecta al mercado... hoy día vigentes», se sustituye por: «Por lo que respecta al arrendamiento de tierras, se pretende superar la rigidez actual del mercado mediante la modificación de los plazos y prórrogas previstos en la normativa vigente»; inmediatamente a continuación, donde se dice «la reducción en la duración mínima...», se acuerda que diga «la reducción de la duración mínima».

Por otra parte, y conforme a la Nota citada, en el primer párrafo del apartado 5 por entenderse que la insuficiencia referida no es «de las normas legales» sino de los instrumentos previstos por las mismas, se acuerda que diga: «la persistencia... evidencia la insuficiencia de los instrumentos y mecanismos articulados en las distintas normas legales que actualmente regulan estas materias y que, por tanto, se modifican por la presente Ley»; el apartado 6 se refiere en su primer párrafo a «la directriz constitucional contenida en el art. 130.1 de la Carta Magna», precepto que no expresa una directriz

sino un «mandato» dirigido a los poderes públicos, por lo que se acuerda sustituir la expresión directriz por «mandato», que es el que se cumplimenta con las medidas propuestas en la ley.

Por fin se acuerda que los apartados 7 a 11 de la exposición se contengan en un apartado único, por cuanto se refieren a la estructura y contenido básico de la ley, encabezando el apartado 7 con esta frase: «La ley se estructura en cuatro títulos»; en congruencia con la supresión acordada del Capítulo II del Título I se suprime la referencia al mismo en la exposición de motivos.

Como consta en el preámbulo del presente informe se integra en el presente proyecto de ley de modernización de las explotaciones agrarias (nº de expte.: 121/61) la proposición de ley de incentivos fiscales a la ampliación y a la continuidad de las explotaciones familiares agrarias (nº de expte.: 122/16).

Artículo 1

A este precepto se han presentado dos enmiendas, la número 89, del G.P. Vasco (PNV) y la número 50, del G.P. Popular. La Ponencia, acuerda rechazar la primera de ellas por cuanto el objeto del Proyecto de ley es establecer el marco regulador básico para la modernización de las explotaciones agrarias en todo el territorio nacional, es decir constituir una norma estructural con carácter nacional; la segunda de ellas por considerar innecesaria la concreción de los tipos de asociacionismo agrario que se fomentan a través del proyecto de ley.

Por otra parte, la Ponencia acuerda sustituir la dicción de «fines y definiciones» que precede el título preliminar por «Disposiciones generales», expresión técnicamente más correcta. Asimismo el título del artículo 1 se sustituye por el de «Objeto», encabezándose del modo siguiente: «Esta ley tiene por objeto la consecución de los siguientes fines...»

Artículo 2

Se han presentado las enmiendas números 108 a 112, del G.P. Catalán (CiU); 3 y 51 a 55 del G.P. Popular; 12 a 17, del G.P. Federal IU-IC; 90 a 93 del G.P. Vasco (PNV). La enmienda nº 108 del G.P. Catalán (CiU) fue retirada en relación con este precepto, por razones sistemáticas, sin perjuicio de su consideración como disposición adicional. La enmienda número 51 del G.P. Popular, dirigida a que se tenga en cuenta el llamado pequeño ahorro agrario, no es aceptada por la excesiva amplitud del concepto «capital mobiliario», en el que se incluye no sólo el capital circulante sino los aperos, ganados, etc..., teniendo en cuenta además que el párrafo 3º *in fine* puede entenderse que incluye el llamado capital circulante. Se rechaza asimismo la enmienda número 12 del G.P. Federal IU-IC, en la que se pide la supresión en este precepto de la definición del Título Preliminar. La Ponencia acuerda que en las fases posteriores del pro-

cedimiento legislativo se considera el contenido de la enmienda número 52. La enmienda número 109 se retira. La enmienda nº 13 se rechaza también, por cuanto la definición de agricultor a título principal viene exigida por la normativa comunitaria, sin perjuicio de que se acuerda volver sobre la cuestión en una fase ulterior, se está estudiando la reforma de la citada normativa. Se rechaza asimismo la enmienda número 90.

La Ponencia rechaza la enmienda número 53 del G. P. Popular que pretende la incorporación al texto de la definición del agricultor a tiempo parcial, por entenderse contraria a la filosofía del proyecto. Se rechaza asimismo la enmienda número 54 con el fin de evitar la posible confusión con entidades asociativas que previamente existen. Se incorpora al texto la enmienda número 110 del G. P. Catalán (CiU), porque contribuye a una mayor precisión conceptual, rechazándose la número 91 del G. P. Vasco (PNV). Se incorpora al texto la enmienda número 3 del G. P. Socialista, por la que se suprime el párrafo segundo del artículo 2.9 ya que la fijación de cuatro unidades de trabajo agrario de mano de obra asalariada computables para el cálculo del indicador se considera una limitación que puede generar en determinadas circunstancias efectos no deseados.

Se rechazan las enmiendas números 14 y 92, retirándose las números 55 y 111, presentadas al mismo apartado noveno. Se rechazan asimismo las enmiendas 15 y 93, retirándose la 112, al apartado décimo. Se rechazan, finalmente, las enmiendas números 16 y 17 del G. P. Federal IU-IC, por las que se pretende, respectivamente, la supresión del apartado undécimo y la incorporación de una nueva definición, la de renta global familiar.

Artículo 3

No se han presentado enmiendas, si bien la Ponencia acuerda aprobar una redacción nueva de este precepto, con el fin de dar mayor claridad a su contenido, de acuerdo con la propuesta de la Nota del Letrado, y con el tenor siguiente: «Las explotaciones agrarias familiares y las asociativas que reúnan, según los casos, los requisitos establecidos por los artículos 4 a 6 de esta Ley, tendrán la consideración de explotaciones prioritarias en orden a la obtención preferente de los beneficios, ayudas y cualesquiera otras medidas de fomento previstas en esta Ley».

Artículo 4

Se rechazan las enmiendas números 18, 19 y 20 del G. P. Federal IU-IC y la número 56 del Grupo Popular. Se acuerda una transacción entre la enmienda número 113 del G. P. Catalán (CiU) y el texto del proyecto en los términos siguientes: «que la renta unitaria de trabajo que se obtenga de la misma sea igual o superior al 40 por 100 de la renta de referencia e inferior al 120 por 100 de ésta...». Se retira la enmienda número 114

del G. P. Catalán (CiU). Se rechazan las enmiendas 21, del G.P. Federal IU-IC y 57, del G.P. Popular coincidentes; y por lo que se refiere a las números 95 y 115, también coincidentes, se acuerda la siguiente transacción al final del apartado d): «... actividad agraria. Los agricultores profesionales, que no estén encuadrados en los regímenes anteriores, deberán cumplir los requisitos indicativos de su profesionalidad agraria establecidos a estos efectos por las Comunidades Autónomas». En el apartado c) se sustituye la expresión «entre los 18 y 60 años cumplidos» por «entre los 18 y los 60 años».

Se acuerda asimismo rechazar las enmiendas números 58 del G. P. Popular, 116 del G. P. Catalán (CiU), 22 y 23 del G. P. Federal IU-IC. Se acuerda incorporar un último punto al final del apartado 3 y en punto y aparte: «El período de indivisión se contará a partir de la calificación de la explotación como prioritaria».

Se rechaza la enmienda número 94 del G. P. Vasco (PNV), por entenderse que no es este precepto el adecuado para referirse a este tipo de explotaciones.

Artículo 5

Se rechazan las enmiendas números 24 del Grupo Federal IU-IC y 59 del Grupo Popular y se retiran las enmiendas números 117, 118 y 119 del G. P. Catalán (CiU). Se incorpora la enmienda número 5 del G. P. Socialista, que es coincidente con la número 60 del G. P. Popular, que en consecuencia también queda integrada.

Por congruencia con la modificación introducida en el artículo anterior se reforma el apartado primero de este artículo en el sentido siguiente: «Con carácter general, para que una explotación asociativa tenga la consideración de prioritaria, se requiere que la explotación posibilite la ocupación de, al menos, una unidad de trabajo agrario, y su renta unitaria de trabajo sea igual o superior al 40 por 100 de la renta de referencia e inferior al 120 por 100 de ésta. Asimismo deberá responder a cualquiera de las alternativas siguientes:»

Artículo 6

Se incorpora la enmienda número 6 del G. P. Socialista, sustituyendo el concepto que figura en la misma («de haberlo») por la más correcta expresión desde el punto de vista jurídico «de existir éste». Se rechazan las enmiendas números 25 y 96. Se retira la enmienda número 61.

Artículo 7

Se acuerda dar una nueva redacción al precepto en transacción con la enmienda número 120 del G.P. Catalán CiU, con el contenido siguiente:

«1. Los titulares de explotaciones prioritarias tendrán un trato preferente en los siguientes supuestos:

a) En la adjudicación de superficies agrarias realizadas por las Administraciones Públicas.

b) En las contrataciones de seguros agrarios subvencionadas con fondos públicos.

c) En el acceso a las actividades formativas organizadas o financiadas por las Administraciones Públicas para mejorar la cualificación profesional de los agricultores.

d) En la concesión de las ayudas establecidas para la mejora de las estructuras agrarias de producción, sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa comunitaria. A estos efectos se podrán establecer criterios de modulación en función de la dedicación y la renta de los titulares, así como de la ubicación de las explotaciones.

e) En las ayudas incluídas en los programas de ordenación de producciones agrarias o de ámbito territorial específico, siempre que ello sea compatible con las finalidades de dichos programas.

f) En la asignación de las cuotas o derechos integrados en las reservas nacionales, constituidas en aplicación o desarrollo de la normativa reguladora de las correspondientes organizaciones comunes de mercado, siempre en concordancia con las condiciones establecidas, al efecto, en dichas normas.

2. Las anteriores situaciones de preferencia estarán condicionadas a que la explotación no pierda la condición de prioritaria por la aplicación de las medidas consideradas en el apartado anterior y se harán extensivas a los titulares de explotaciones que, mediante la aplicación de estas medidas, alcancen la consideración de prioritarias».

Se retira la enmienda número 62 del G.P. Popular, rechazándose las demás presentadas al artículo 7.

Capítulo II (artículos 8 a 14)

La Ponencia acuerda, aceptando las enmiendas coincidentes del G.P. Catalán CiU y del G.P. Federal IU-IC (números 27 y 121) y el espíritu de las presentadas por el G.P. Vasco, suprimir el presente capítulo, y en consecuencia los artículos 8 a 14, por entenderse, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, que no cabe la regulación detallada en una ley estatal de carácter básico de las ayudas económicas a los planes de mejora y otras ayudas, resultando más adecuado que tal regulación se realice por vía reglamentaria. Se retiran, en consecuencia, las enmiendas 7 y 8 del G.P. Socialista.

Artículo 15

Al artículo no se han presentado enmiendas. No obstante, se suprime, de acuerdo con la Nota del Letrado, la expresión «notariales».

Artículo 16

A este artículo se han presentado las enmiendas números 122 a 124, del G.P. Catalán (CiU); 28, del G.P. Federal IU-IC y 71, del G.P. Popular. Se acuerda, en transacción con las enmiendas números 122 y 123 del G.P. Catalán (CiU), la número 71, del G.P. Popular y la 28 del G.P. Federal IU-IC, una nueva redacción del precepto con el título de «Transmisión de la explotación», que es la siguiente:

1. La transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, «inter vivos» o «mortis causa», del pleno dominio o del usufructo vitalicio de una explotación agraria en su integridad, en favor o por el titular de otra explotación que sea prioritaria o que alcance esta consideración como consecuencia de la adquisición gozará de una reducción del 90 por 100 de la base imponible del impuesto que grave la transmisión o adquisición de la explotación o de sus elementos integrantes, siempre que, como consecuencia de dicha transmisión, no se altere la condición de prioritaria de la explotación del adquirente. La transmisión de la explotación deberá realizarse en escritura pública.

A los efectos indicados en el párrafo anterior se entenderá que hay transmisión de una explotación agraria en su integridad, aun cuando se excluya la vivienda.

2. Para que se proceda a dicha reducción, se hará constar en la escritura pública de adquisición, y en el Registro de la Propiedad, si las fincas transmitidas estuviesen inscritas en el mismo, que si las fincas adquiridas fuesen enajenadas, arrendadas o cedidas durante el plazo de los cinco años siguientes, deberá justificarse previamente el pago del impuesto correspondiente, o de la parte del mismo, que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora, excepción hecha de los supuestos de fuerza mayor que pudieran establecerse.

3. La continuación de la explotación por el cónyuge superviviente en ningún caso se considerará sujeta a tributación.»

La enmienda número 124, del G.P. Catalán (CiU) se incorpora como disposición adicional quinta.

Artículo 17

A este artículo se han presentado las enmiendas números 72, del G.P. Popular, 125, del G.P. Catalán (CiU) y 29, del G.P. Federal IU-IC.

Se incorpora la enmienda número 125, del G.P. Catalán (CiU). Se rechazan las enmiendas números 29, del G.P. Federal IU-IC y 72, del G.P. Popular.

Artículo 18

A este artículo se ha presentado la enmienda número 126, del G.P. Catalán (CiU), con lo que se formula la

transacción siguiente al artículo cuyo título es: «Transmisión parcial de explotaciones y de fincas rústicas».

«En la transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, «inter vivos» o «mortis causa», del pleno dominio o del usufructo vitalicio de una finca rústica o de parte de una explotación agraria, en favor de un titular de explotación prioritaria que no pierda o que alcance esta condición como consecuencia de la adquisición, se aplicará una reducción del 75 por 100 en la base imponible de los impuestos que graven la transmisión o adquisición. Para la aplicación del beneficio deberá realizarse la transmisión en escritura pública, y será de aplicación lo establecido en el apartado 2 del artículo 9.»

Al título de este precepto se incorpora la preposición «de» entre transmisión y fincas, por ser técnicamente más correcto.

Artículo 19

Por el G.P. Catalán (CiU) se retira la enmienda número 127, presentada a este precepto. La Ponencia remite al debate de la Comisión la consideración de que a los efectos previstos en este precepto no se condiciona a que «uno de los permutantes sea titular de una explotación agraria prioritaria».

Artículo 20

No se acepta por la Ponencia la incorporación de las enmiendas números 30 y 31 del Grupo Federal IU-IC que pretendían establecer dos nuevos preceptos.

Artículo 21

Se rechaza la enmienda número 73 del G.P. Popular. Se retira la enmienda número 128 del G.P. Catalán (CiU). Se acuerda, no obstante, en orden a que todas las entidades asociativas se puedan beneficiar de la libertad de amortización, modificar el encabezamiento del precepto: «En el caso de explotaciones asociativas prioritarias gozarán de libertad de amortización los elementos de inmovilizado material afectos a la realización de sus actividades agrarias, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la fecha de su reconocimiento como explotación prioritaria...» (resto igual al proyecto).

Para evitar la confusión con el título del artículo 5 se sustituye el del proyecto por «Amortización del inmovilizado material de las explotaciones asociativas».

Artículo 22

A este precepto se han presentado dos enmiendas coincidentes en la supresión del precepto, la número 32,

del G.P. IU-IC y la 74, del G.P. Popular. Se acepta el contenido de las mismas, suprimiéndose el precepto.

Artículo 23

Al precepto no se han presentado enmiendas.

Artículo 24

Se retira la enmienda número 129, del G.P. Catalán (CiU). No se aceptan las enmiendas números 33 y 34, del G.P. Federal IU-IC y 103, del G.P. Vasco PNV.

Artículo 25

Se rechaza la enmienda número 35 del G.P. Federal IU-IC, si bien se acuerda una nueva redacción del precepto con el título «Primera instalación», con el fin de acomodar la misma a la normativa comunitaria recientemente modificada, teniendo en cuenta la Noa del Letrado respecto del inciso primero y con el tenor siguiente:

«1. Con la finalidad de promover el rejuvenecimiento de la población activa agraria se concederán ayudas a los agricultores jóvenes que se instalen por primera vez en una explotación agraria prioritaria como titular, cotitular o socio de la misma. También se considerará como primera instalación la realizada por un agricultor joven que habiéndose instalado anteriormente a tiempo parcial pase a ser titular de una explotación prioritaria.

2. Cuando un agricultor joven sea cotitular de una explotación agraria, bastará que reúna personalmente los requisitos que se exigen al titular de las explotaciones prioritarias para que aquélla alcance tal consideración.

3. Será criterio de consideración preferente en la concesión de las ayudas para la primera instalación de agricultores jóvenes, el acceso a la misma bajo el régimen de cotitularidad señalado en el artículo siguiente.»

Artículo 26

Se rechaza la enmienda número 35 del G.P. Federal IU-IC; se incorpora la enmienda número 9 del G.P. Socialista con el objeto de ampliar la posibilidad a jóvenes que estuvieran estudiando o en otras circunstancias; se suprime, en consecuencia, el apartado a) del párrafo 1º, pasando los b) y c) a ser a) y b). Las referencias del párrafo 2º a dichas letras se adecúan asimismo. Se retira la enmienda número 130 del Grupo Catalán (CiU).

Artículo 27

Se rechaza la enmienda número 35 del Grupo Federal IU-IC. Se acuerda suprimir el inciso final del apartado c), es decir «en los casos contemplados... zonas afectadas».

Artículo 28

Se suprime este precepto, de conformidad con las enmiendas coincidentes del G.P. Federal IU-IC (nº 35) y Catalán (CiU) (nº 131).

Artículo 29

Se suprime este precepto, de conformidad con las enmiendas coincidentes del G.P. Federal IU-IC (nº 35) y Catalán (CiU) (nº 132).

Artículo 30

Se acuerda la supresión del último apartado del número 5, de acuerdo con lo propuesto en la Nota del Letrado, por cuanto el contenido de las dos disposiciones citadas se refiere al ejercicio de 1994, ya transcurrido. Asimismo, en transacción con las enmiendas números 133 y 134 del G.P. Catalán (CiU), se acuerda una nueva redacción de los dos primeros párrafos del precepto, con el título de «Beneficios fiscales especiales» en los términos siguientes:

«1. La transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, «inter vivos» o «mortis causa», del pleno dominio o del usufructo vitalicio de una explotación agraria o de parte de la misma o de una finca rústica, en favor de un agricultor joven para su primera instalación en una explotación prioritaria, estará exenta del impuesto que grave la transmisión o adquisición de que se trate.

2. Las reducciones en la base imponible establecidas en los artículos 9 y 11 se incrementarán en diez puntos porcentuales, en cada caso, si el adquirente es, además, un agricultor joven y la transmisión o adquisición se realiza durante los cinco años siguientes a su primera instalación.»

Por fin, en el primer párrafo del apartado 5, se acuerda que diga *in fine*: «...siempre que acrediten la realización de un plan de mejora de la explotación».

Se acepta asimismo la enmienda número 36 del G.P. IU-IC, añadiendo en los apartados 1 y 2 «o un asalariado agrario» detrás de «agricultor joven»; asimismo en los apartados 4 y 5 «o asalariados agrarios» detrás de «agricultores jóvenes». En el apartado cuatro se suprime la expresión «notariales» después de escrituras públicas.

Se rechazan las enmiendas números 37 y 38 del G.P. Federal IU-IC. Se retira la enmienda número 75 del Grupo Popular.

Artículo 31

Se acuerda suprimir este artículo, de acuerdo con las enmiendas coincidentes números 35, 76 y 135, respecti-

vamente de los Grupos Federal IU-IC, Popular y Catalán (CiU).

Artículo 32

Sin enmiendas. No obstante, se acuerda modificar la primera parte del párrafo 4 y decir: «El infractor titular de la explotación, podrá además ser sancionado...», por ser más correcta la redacción. Se acuerda asimismo que *in fine* del citado párrafo diga, en lugar de graves, «muy graves», de acuerdo con lo propuesto en la Nota del Letrado.

Artículo 33

Se rechaza la enmienda número 77 del Grupo Parlamentario Popular, si bien, en coherencia con la supresión del Capítulo II, se modifica el encabezamiento del artículo que dice: «Las ayudas a que se refiere esta Ley podrán ser financiadas por la Administración General del Estado y por las de las Comunidades Autónomas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios de colaboración para la cofinanciación de dichas ayudas, con arreglo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.»

Artículo 34

Sin enmiendas.

Artículo 35

Se rechaza la enmienda número 39 del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

Por lo que concierne a la enmienda número 78 del Grupo Popular, se acepta incorporar su sentido añadiendo al final del párrafo 3: «La partición de herencia se realizará teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 1 de este artículo, aun en contra de lo dispuesto por el testador aplicando las reglas contenidas en el Código Civil sobre las cosas indivisibles por naturaleza o por ley y sobre la adjudicación de las mismas a falta de voluntad expresa del testador o de convenio entre los herederos.»

Artículo 36

Sin enmiendas. Se incorpora la propuesta de la Nota del Letrado, de manera que en la letra d) en lugar de «sin perjuicio de lo dispuesto de la LEF», diga «de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa».

Artículo 37

Se dejan para un más detallado estudio en una fase ulterior del procedimiento las enmiendas números 79 y 80.

Artículo 38

Se rechaza la enmienda número 40 del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

Artículo 39

Sin enmiendas.

Artículo 40

Sin enmiendas.

Disposición Adicional Primera

Se da la siguiente redacción al precepto, en transacción con las enmiendas números 10 y 136.

«Tienen el carácter de legislación básica en virtud de lo previsto en el artículo 149.1.13ª de la Constitución los siguientes preceptos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, la Disposición Final Segunda, en lo que se refiere a la modificación que se introduce en el artículo 28 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y Disposición Final Tercera.»

La enmienda número 81 del Grupo Popular es rechazada, lo mismo que las enmiendas números 104 y 105, del Grupo Vasco (PNV).

Disposición Adicional Segunda

Se rechaza la enmienda número 82. En el párrafo segundo ha de suprimirse la referencia a los preceptos ya suprimidos consecuencia de este trámite. Por lo demás se incorpora la enmienda número 11 del G.P. Socialista, en los términos siguientes: «Igualmente son de aplicación plena los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 20, sin perjuicio de lo establecido en el Concierto aplicable a los territorios históricos del País Vasco conforme a la Ley 12/1981, de 13 de mayo, y en el Convenio Económico aplicable a la Comunidad Foral de Navarra con arreglo a la Ley 28/1990 de 26 de diciembre.»

Se suprime, de acuerdo con la propuesta de la Nota, el inciso siguiente: «en cuanto al artículo 28, 32 y primer inciso del artículo 35 de la ley de Reforma y Desarrollo Agrario», pues es precisamente el contenido exclusivo de la disposición final segunda.

Disposición Adicional Tercera

Sin enmiendas.

Disposición Adicional Cuarta (nueva).

Se rechazan las enmiendas números 2, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, la número 83 del Grupo Popular y se acuerda una transacción con la número 137 del Grupo Catalán (CiU), conforme a la redacción siguiente:

«Disposición Adicional Cuarta. Bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para las explotaciones forestales.

El primer párrafo de la letra c) del artículo 64 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales queda redactado de la siguiente forma:

Los montes poblados con especies de crecimiento lento de titularidad pública o privada. Esta exención se refiere a las especies de crecimiento lento mencionados en los anexos 1, 2 y 3 del Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo; cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, y aquella parte del monte poblada por las mismas, siempre y cuando la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie que se trate.».

Disposición Adicional Quinta (nueva)

Se rechaza la enmienda número 84, por entenderse que ya está solventada la cuestión que se plantea. Se incorpora una adicional quinta, que se corresponde con el texto siguiente:

«Disposición Adicional Quinta. Bonificaciones fiscales en la transmisión de superficies rústicas de dedicación forestal.

En las transmisiones «mortis causa» y en las donaciones «inter vivos» equiparables de superficies rústicas de dedicación forestal, tanto en pleno dominio como en nuda propiedad, se practicará una reducción en la base imponible del impuesto correspondiente, según la siguiente escala:

— Del 90% para superficies incluidas en Planes de Protección por razones de interés natural aprobados por el órgano competente de la comunidad autónoma, o en su caso, por el correspondiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

— Del 75% para superficies con un Plan de Ordenación forestal o un Plan Técnico de Gestión y Mejora Forestal, o figuras equivalentes de planificación forestal, aprobado por la Administración competente.

— Del 50% para las demás superficies rústicas de dedicación forestal, siempre que como consecuencia de dicha transmisión no se altere el carácter forestal del precio y no sea transferido por razón de inter vivos, arrendada o cedida sus explotación por el adquirente, durante los cinco años siguientes al de la adquisición.

De la misma reducción gozará la extinción del usufructo que se hubiera reservado el transmitente.

Las bonificaciones fiscales reguladas en esta Disposición Adicional serán de aplicación, en la escala que corresponda, a la totalidad de la explotación agraria en la que la superficie de dedicación forestal sea superior al 80% de la superficie total de la explotación».

Disposición Transitoria Unica

Se rechazan las enmiendas números 41 y 85. Se retira la enmienda número 138 del Grupo Catalán (CiU). Se rechaza también la enmienda número 86 del Grupo Popular.

Disposición Derogatoria Unica

Se rechaza la enmienda número 42 del Grupo Federal IU-IC.

Disposición Final Primera

Se rechaza la enmienda número 43 del Grupo Federal IU-IC. En la modificación de las letras b) y c) de la Ley de Arrendamientos Rústicos se acuerda que a «sociedades cooperativas» y «sociedades agrarias» preceda el artículo «las».

Disposición Final Segunda

Sin enmiendas.

Disposición Final Tercera

Se retiran las enmiendas números 139 y 140, y se rechazan las números 87 y 106.

Disposición Final Cuarta

Se acepta la enmienda número 88 del Grupo Parlamentario Popular.

Disposición Final Quinta

Sin enmiendas.

Disposición Final Sexta

Se retira la enmienda número 141 del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) y se rechaza la número 107, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y la 47 y 45 del Grupo Parlamentario Federal IU-IC.

Palacio del Congreso de los Diputados, a 7 de febrero de 1995.—**Josep Pau i Pernaú, Gerardo Torres Sahuquillo, Francisco San Martín Sala, José Ramón Pascual Monzo, Miguel Ramírez González, Mercé Rivadulla Gracia, Pere Vidal i Sardo, Ricardo Gatzagaetxebarria Bastida.**

A N E X O

PROYECTO DE LEY DE MODERNIZACION DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

La agricultura española ha estado sometida a profundos cambios estructurales en las pasadas décadas. La crisis de la agricultura tradicional tuvo como consecuencia la generalización de un modelo de explotación agraria más basado en la tecnología que en la utilización intensiva de mano de obra, al tiempo que abierta plenamente a los mercados.

Sin embargo, en el modelo agrario dominante ha permanecido el carácter básicamente familiar de las explotaciones, que si bien constituye una garantía de colonización del territorio y de mantenimiento del tejido rural, también implica la pervivencia de deficiencias estructurales que es preciso corregir.

Más recientemente la agricultura ha hecho frente al difícil reto de la integración en la Unión Europea. Una vez finalizado el período de transición, cabe concluir que la agricultura española se ha incorporado con normalidad a un mercado mucho más amplio y libre, al tiempo que las explotaciones agrarias han sabido adaptarse a una Política Agraria más compleja y exigente.

Pero los recientes cambios registrados en la Política Agraria Común y los acuerdos comerciales multilaterales en el marco del G.A.T.T. anuncian una nueva fase de profundos cambios en los mercados y, por tanto, la agricultura española habrá de enfrentarse a un nuevo proceso de adaptación.

II

En el nuevo contexto de mercados mucho más abiertos la agricultura no sólo tendrá que cumplir su tradicional función productiva de alimentos y materias primas, sino que deberá diversificarse para dar satisfacción a nuevas demandas sociales ligadas a la conservación del

medio ambiente y a la economía del ocio en el medio rural.

Como consecuencia de todo ello, la modernización de las explotaciones agrarias debe considerar la reestructuración productiva, como medio de sostener y elevar la capacidad de competir en los mercados, pero, también, la diversificación de actividades que permita en el futuro la obtención de rentas procedentes de los nuevos sectores en auge.

III

Las nuevas circunstancias aconsejan redoblar los esfuerzos para superar las deficiencias estructurales que limitan las posibilidades de competir de muchas explotaciones agrarias. A pesar del esfuerzo de ajuste estructural llevado a cabo en los últimos años, persisten problemas de reducida dimensión de las explotaciones, de envejecimiento de la población agraria, de rigidez en los mercados de la tierra, de escasa flexibilidad en los modos de producción o de insuficiencia en la organización comercial.

El objetivo fundamental de la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias es corregir los desequilibrios y las deficiencias estructurales que condicionan la competitividad de las explotaciones agrarias, de modo que la agricultura española pueda afrontar la creciente liberalización de mercados, al tiempo que se aseguren los equilibrios ecológicos básicos y se abren nuevas vías para la obtención de rentas complementarias a los profesionales de la agricultura.

IV

La Ley utiliza como referencia básica de actuación el concepto de explotación prioritaria, sea esta familiar o de carácter asociativo. Este modo de explotación prioritaria queda definido por criterios subjetivos ligados al titular, así como otros de carácter objetivo de modo que, globalmente, aseguren la viabilidad económica de la explotación y justifiquen la posible concesión de apoyos públicos de modo preferente.

Siendo la insuficiente dimensión de muchas explotaciones uno de los problemas que condicionan su viabilidad futura, la Ley propone medidas para dinamizar los mercados de la tierra, para permitir un más fácil acceso a la propiedad y al arrendamiento. De este modo se proponen incentivos fiscales a las transmisiones de fincas rústicas por compra, sucesión o donación, en el caso de constitución o consolidación de explotaciones prioritarias, al tiempo que se contemplan incentivos especiales en la transmisión íntegra de explotaciones, o cuando se efectúan en beneficio de agricultores jóvenes.

Por lo que respecta al arrendamiento de tierras, se pretende superar la rigidez actual del mercado mediante la modificación de los plazos y prórrogas previstos en la normativa vigente. La reducción de la duración mínima

de los arrendamientos es más acorde con la frecuencia con que se vienen produciendo los cambios en la agricultura actual y puede permitir un sustancial incremento en la oferta de tierras a arrendar, así como un mercado más ágil y abierto.

V

La persistencia de muchos problemas estructurales evidencia la insuficiencia de los instrumentos y mecanismos articulados en las distintas normas legales que actualmente regulan estas materias y que, por tanto, se modifican por la presente Ley.

En este sentido cabe mencionar la Ley 49/1981, de 24 de diciembre, del Estatuto de la Explotación Familiar y de los Agricultores Jóvenes. Si bien los objetivos de la citada Ley siguen siendo válidos, en gran medida, los instrumentos aplicados en su consecución no se han mostrado eficaces. Por otra parte, la integración de España en la Unión Europea y la consiguiente adaptación de la normativa comunitaria, ha dejado obsoleta la regulación que en dicha Ley se hace en materia de modernización de explotaciones e incorporación de agricultores jóvenes. Por todo lo anterior, se deroga esta Ley, sin perjuicio de rescatar los principios, conceptos y consideraciones específicas que se han estimado útiles en la actualidad, precisando y ampliando su ámbito de aplicación.

Siendo el actual grado de envejecimiento de muchos titulares de explotaciones agrarias uno de los principales frenos a la modernización de la agricultura, facilitar el acceso de jóvenes a la responsabilidad y titularidad de la explotación constituye uno de los objetivos de esta Ley.

Por ello se establecen medidas de fomento a la instalación de jóvenes en las tareas de dirección y gestión de explotaciones prioritarias. Estas medidas contemplan bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como un tratamiento específico más ventajoso en otras ayudas y beneficios fiscales regulados en esta Ley con carácter general para los titulares de explotaciones prioritarias.

VI

La presente Ley responde al mandato constitucional contenida en el artículo 130.1 de la Carta Magna, según el cual «los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles».

Para el cumplimiento de sus finalidades, la Ley establece una serie de disposiciones generales, la mayoría de las cuales se refieren a típicas medidas de fomento y modernización, que encuentran su plena justificación en el referido artículo 130.1, mientras que otras imponen

ciertos límites al contenido y ejercicio de las facultades dominicales y derechos patrimoniales sobre tierras dedicadas a la agricultura, deducibles de su función social, tal como prevé el artículo 33.2 de la Constitución, límites tanto más justificados en cuanto que sirven al objetivo de modernización del sector agrario.

Es evidente que la materia principal del contenido de la presente Ley es la agricultura, materia sobre la que todas las Comunidades Autónomas han asumido la competencia en sus respectivos Estatutos de Autonomía. Pero, como también se señala en todos los Estatutos, aunque con distinta formulación, dicha competencia autonómica se entiende atribuida «de acuerdo con las bases y la ordenación de la economía» o «de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general», en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.13ª de la Constitución.

Por ello, la intervención legislativa estatal en materia de modernización de las explotaciones agrarias se halla legitimada, en virtud de las competencias que le corresponden para la regulación de las bases o medidas que requieran la ordenación y la coordinación de la planificación general de la economía.

Pero, además, algunos aspectos del contenido de la presente Ley se sustentan en otros títulos competenciales del Estado. Así, las normas que establecen modificaciones del régimen legal de arrendamientos, las que regulan las transmisiones «inter vivos» o «mortis causa» de las explotaciones constituidas por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, las que preceptúan la indivisibilidad de determinadas fincas rústicas e incluso, las que regulan el derecho de retracto en favor de los colindantes titulares de explotaciones prioritarias, han de considerarse todas ellas integradas en el ámbito de la legislación civil, que corresponde al Estado, de acuerdo con el artículo 149. 1. 8ª de la Constitución.

Por otra parte, las normas que establecen beneficios fiscales sobre tributos del Estado o Hacienda General, tanto sobre los no cedidos como los cedidos a las Comunidades Autónomas, son de competencia estatal, conforme determina el artículo 149. 1.14ª de la Constitución, ya que en el caso de cesión de tributos a las Comunidades Autónomas, lo que se cede no es la disposición, incluso legislativa, sobre la figura tributaria, sino tan sólo el rendimiento de dichos tributos.

VII

La ley se estructura en cuatro títulos. El título preliminar especifica los objetivos de la ley, al tiempo que establece un conjunto de definiciones, entre las que destacan las de «agricultor profesional» y «agricultor a título principal».

El concepto de profesional de la agricultura aparece por primera vez en nuestra legislación en la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos, donde se define como la persona que se dedique o vaya a dedicarse de manera preferente a actividades de

carácter agrario, ocupándose de una manera efectiva y directa de la explotación.

La presente Ley precisa más este concepto al definir al agricultor profesional y al agricultor a título principal, en relación con la procedencia de sus rentas y el tiempo dedicado a actividades agrarias u otras complementarias. Estos conceptos son esenciales en la Ley, puesto que uno de los requisitos para que las explotaciones agrarias tengan la consideración de prioritarias, es el grado de dedicación a la agricultura de sus titulares.

El concepto de agricultor a título principal procede de la normativa comunitaria, Reglamento (CEE) 2328/91 del Consejo, de 15 de julio de 1991, y ya estaba recogido en nuestro ordenamiento jurídico a través de varios Reales Decretos por los que se ha desarrollado en España dicha norma. En la presente Ley es también tenido en consideración para la concesión de ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes.

El título I trata de las explotaciones agrarias prioritarias y se divide en seis capítulos. El capítulo I determina el concepto y características de las explotaciones agrarias prioritarias, a las que se reconoce preferencia de trato en el acceso a las ayudas públicas a la agricultura.

El capítulo II regula una serie de beneficios fiscales relativos a tributos del Estado, cedidos o no a las Comunidades Autónomas, en favor de los titulares de explotaciones prioritarias, tendentes a mantener la integridad de las explotaciones, a la ampliación de las mismas, a facilitar la movilidad del mercado de la tierra, así como el acceso al crédito de los agricultores que pretendan modernizar sus explotaciones.

El capítulo III establece el Catálogo General de explotaciones prioritarias, que dependerá del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y será elaborado a partir de la información que transmitan las Comunidades Autónomas.

El capítulo IV regula las ayudas económicas y los beneficios fiscales que se establecen en favor de los jóvenes agricultores. Estas medidas de fomento sólo son reguladas en sus aspectos esenciales, fijándose criterios orientadores, que deberán ser desarrollados y adaptados por las Comunidades Autónomas.

El capítulo V se refiere al régimen sancionador por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley, remitiéndose a lo dispuesto en la Ley General Presupuestaria y en la Ley General Tributaria, así como a las normas específicas sobre la materia que tengan establecidas las Comunidades Autónomas.

El capítulo VI se refiere a la financiación de las ayudas, limitándose a establecer un principio general, quedando al arbitrio de cada Comunidad Autónoma determinar el volumen y la distribución de los recursos, entre unos y otros tipos de ayudas.

El título II contiene el régimen de las unidades mínimas de cultivo, dirigido a impedir el fraccionamiento excesivo de fincas rústicas. Anteriormente, este régimen se hallaba incluido en el título III del Libro segundo de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, cuyo texto fue aprobado por Decreto 118/1973, de 12 de enero.

El régimen se modifica fundamentalmente, al atribuir a las Comunidades Autónomas la determinación de la extensión de la unidad mínima de cultivo, al establecer la nulidad de los actos o negocios jurídicos en cuya virtud se produzca la división o segregación de una finca rústica cuando dé lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo y, sobre todo, al constituir un derecho de retracto legal en favor de titulares de explotaciones prioritarias.

El título III contiene dos preceptos relativos a los contratos de arrendamientos rústicos. Por el primero de ellos se establece la duración mínima de los contratos en cinco años, suprimiéndose las prórrogas legales que determina el artículo 25 de la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos, con la finalidad de conseguir una mayor movilidad en el mercado de la tierra. Todo ello afectará tan sólo a los contratos de arrendamiento que se celebren con posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.

El segundo precepto establece la concesión de incentivos económicos al arrendador, cuando el contrato contemple una duración igual o superior a ocho años, siempre que el arrendamiento se destine a la constitución de explotaciones prioritarias.

La disposición adicional primera determina los preceptos de la Ley que tienen carácter de legislación básica, mientras que la disposición adicional segunda se refiere a los preceptos que son de aplicación plena, dejando a salvo las normas de Derecho civil, foral o especial, así como los regímenes tributarios de concierto y convenio económico.

La disposición adicional tercera modifica parcialmente la financiación del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, procediéndose a la supresión de la cotización por jornadas teóricas.

El Texto Refundido de las Leyes 38/1966, de 31 de mayo y 41/1970, de 22 de diciembre, por las que se establece y regula el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 2123/1971, de 21 de julio, estableció dentro de las fuentes de financiación del citado Régimen Especial la cotización empresarial por jornadas teóricas, cotización que recaía sobre todas las personas que fueran titulares de una explotación agraria, con independencia de que ocupasen o no trabajadores por cuenta ajena, así como del hecho de que sus titulares reunieran o no la condición de trabajadores por cuenta propia del mencionado Régimen Especial.

Posteriormente, y a través del Real Decreto 1134/1979, de 4 de mayo, se modificó parcialmente la cotización al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, mediante el establecimiento de una cotización empresarial por jornadas reales, cotización que recaía en los empresarios que contratasen para labores agrarias trabajadores por cuenta ajena, cotización que debería ir progresivamente sustituyendo la cuota empresarial por jornadas teóricas.

Teniendo en cuenta que la cotización por jornadas teóricas grava la propiedad o posesión de la tierra y es independiente del hecho de que se realicen o no jornadas

reales, resulta conveniente adecuar el sistema de financiación del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a su naturaleza específica.

La disposición transitoria única tiene por objeto flexibilizar determinados requisitos necesarios para la calificación de explotaciones como prioritarias durante un plazo que finaliza el 31 de diciembre 1998.

Por la disposición derogatoria única, la presente Ley deroga, además de la Ley 49/1981, de 24 de diciembre, el Título II del Libro Primero, el Título III del Libro Segundo y el Título IV del Libro Cuarto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

El Título II del Libro Primero regula el Consejo del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Este órgano colegiado, por su cometido y composición, no tiene razón de ser en la actualidad, por lo que procede su supresión.

El Título III del Libro Segundo, trata del régimen de unidades mínimas de cultivo, siendo sustituido por la nueva regulación que se contiene en el Título II de la presente Ley.

El Título IV del Libro Cuarto, regula las explotaciones agrarias ejemplares y cualificadas, conceptos que han quedado actualmente obsoletos y sin contenido, especialmente al regularse en la presente Ley las explotaciones prioritarias.

Las disposiciones finales primera y segunda se refieren a las modificaciones que se introducen en la Ley de Arrendamientos Rústicos y en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. Las modificaciones en la Ley de Arrendamientos Rústicos hacen referencia al concepto de profesional de la agricultura, como consecuencia del nuevo concepto que se establece en la presente Ley, y al ámbito territorial de las Juntas Arbitrales, con objeto de que las Comunidades Autónomas puedan determinarlo con una mayor libertad, según sus necesidades específicas.

Las modificaciones que se introducen en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario son debidas a que la presente Ley deroga, la Ley 49/1981, de 24 de diciembre, del Estatuto de la Explotación Familiar Agraria y de los Agricultores Jóvenes, por no haber tenido apenas aplicabilidad. Esta Ley 49/1981, derogó parcialmente los artículos 32 y 35 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, al establecer un régimen sucesorio único para las explotaciones familiares agrarias, tanto las constituidas por particulares, como por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. Pero al derogarse por la presente Ley, la Ley 49/1981, es necesario dar nueva redacción a los mencionados artículos para regular la sucesión de las explotaciones constituidas por dicho Instituto o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que hayan asumido las funciones de aquél, puesto que si no se hiciese, se carecería de regulación en esta materia.

En cuanto al artículo 28 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, exige la autorización del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario para desafectar, dividir, gravar o transmitir por actos «inter vivos» las explotaciones constituidas por dicho Instituto. Esta autori-

zación es exigida sin ninguna limitación en el tiempo, lo que lleva a la consecuencia de que exista una intervención administrativa a perpetuidad. Por ello, se ha considerado conveniente dar una nueva redacción al artículo 28, en el sentido de limitar a un plazo de ocho años la necesidad de dicha autorización, que en la actualidad corresponde resolver a las Comunidades Autónomas.

La disposición final tercera se refiere a los territorios con insuficiencias estructurales, la cuarta al establecimiento de un arancel especial en las actuaciones de Notarios y Registradores de la Propiedad que se deriven de los efectos de esta Ley; la quinta a la facultad desarrollo de la Ley que corresponde a los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Trabajo y Seguridad Social y la sexta a la determinación periódica de indicadores a utilizar para la calificación de las explotaciones como prioritarias.

TITULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.

Esta Ley tiene por objeto la consecución de los siguientes fines:

- a) Estimular la formación de explotaciones agrarias de dimensiones suficientes para asegurar su viabilidad y que constituyan la base permanente de la economía familiar de sus titulares.
- b) Definir las explotaciones agrarias que se consideran destinatarias prioritarias de los apoyos públicos a la agricultura y de los beneficios establecidos por la presente Ley.
- c) Favorecer la incorporación de agricultores jóvenes como titulares de las explotaciones prioritarias.
- d) Fomentar el asociacionismo agrario como medio para la formación o apoyo de explotaciones agrarias con dimensión suficiente para su viabilidad y estabilidad.
- e) Impedir el fraccionamiento excesivo de las fincas rústicas.
- f) Incrementar la movilidad en el mercado de la tierra, tanto en propiedad como en arrendamiento.
- g) Mejorar la cualificación profesional de los agricultores, especialmente de los jóvenes, para su adaptación a las necesidades de la agricultura moderna.
- h) Facilitar el acceso al crédito de los titulares de explotaciones que pretendan modernizar éstas.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de esta Ley se entiende por:

1. Actividad agraria, el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales.

2. Explotación agraria, el conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, primordialmente, con fines de mercado, y que constituye en sí misma una unidad técnico-económica caracterizada por la utilización de unos mismos medios de producción.

3. Elementos de la explotación, los bienes inmuebles de naturaleza rústica y cualesquiera otros que son objeto de aprovechamiento agrario permanente; la vivienda con dependencias agrarias; las construcciones e instalaciones agrarias, incluso de naturaleza industrial, y los ganados, máquinas y aperos, integrados en la explotación y afectos a la misma, cuyo aprovechamiento y utilización corresponden a su titular en régimen de propiedad, arrendamiento, derechos de uso y disfrute e incluso por mera tolerancia de su dueño. Asimismo constituyen elementos de la explotación todos los derechos y obligaciones que puedan corresponder a su titular y se hallen afectos a la explotación.

4. Titular de la explotación, la persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la gestión de la explotación.

5. Agricultor profesional, la persona física que siendo titular de una explotación agraria, al menos, el cincuenta por ciento de su renta total la obtenga de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada en su explotación no sea inferior al veinticinco por ciento de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo total.

A estos efectos se consideran actividades complementarias, las de transformación y venta directa de los productos de su explotación y las relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del medio ambiente, así como las turísticas, cinegéticas y artesanales realizadas en su explotación.

6. Agricultor a título principal, el agricultor profesional que obtenga al menos el 50 por 100 de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total.

7. Agricultor joven, la persona que haya cumplido los 18 años y no haya cumplido 40 años y ejerza o pretenda ejercer la actividad agraria.

8. Unidad de trabajo agrario, el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria.

9. Renta unitaria de trabajo, el rendimiento económico generado en la explotación agraria que se atribuye a la unidad de trabajo y que se obtiene dividiendo entre el número de unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotación, la cifra resultante de sumar el margen neto

o excedente neto de explotación y el importe de los salarios pagados.

10. Renta de referencia, indicador relativo a los salarios no agrarios en España. La determinación anual de su cuantía se hará en concordancia con lo previsto al respecto en la normativa de la Comunidad Europea y teniendo en cuenta los datos de salarios publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

11. Pequeño agricultor, el agricultor a título principal cuya explotación agraria no supere 12 unidades de dimensión europea (UDEs) y cuya renta total sea igual o inferior al 75 por 100 de la renta de referencia.

TITULO I

EXPLOTACIONES AGRARIAS PRIORITARIAS

CAPITULO I

Determinación

Artículo 3. Efectos.

Las explotaciones agrarias familiares y las asociativas que reúnan, según los casos, los requisitos establecidos por los artículos 4 a 6 de esta Ley, tendrán la consideración de explotaciones prioritarias en orden a la obtención preferente de los beneficios, ayudas y cualesquiera otras medidas de fomento previstas en esta Ley».

Artículo 4. Explotaciones familiares.

1. Para que una explotación cuyo titular sea una persona física tenga la consideración de prioritaria, se requiere que la explotación posibilite la ocupación, al menos, de una unidad de trabajo agrario, y que la renta unitaria de trabajo que se obtenga de la misma sea igual o superior al 40 por 100 de la renta de referencia e inferior al 120 por 100 de ésta, sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Transitoria Única. Además, el titular ha de reunir los siguientes requisitos:

a) Ser agricultor profesional, conforme a lo establecido en el apartado 5 del artículo 2.

b) Poseer un nivel de capacitación agraria suficiente, para cuya determinación se conjugarán criterios de formación lectiva y experiencia profesional.

c) Tener una edad comprendida entre los 18 y los 60 años. Este límite de edad podrá elevarse hasta los 65 años, siempre que exista acuerdo para el acceso a la cotitularidad de la explotación, conforme a lo establecido en el artículo 26 de esta Ley.

d) Estar dado de alta en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos en función de su actividad agraria. Los agricultores profesionales que no estén encuadrados en los regímenes ante-

riores, deberán cumplir los requisitos indicativos de su profesionalidad agraria establecidos a estos efectos por las Comunidades Autónomas

e) Residir en la comarca en donde radique la explotación o en las comarcas limítrofes. A estos efectos, las Comunidades Autónomas determinarán el ámbito territorial de cada comarca. En su defecto se tendrá en cuenta la comarcalización agraria establecida en el Censo Agrario del Instituto Nacional de Estadística.

2. En caso de matrimonio, la titularidad de la explotación podrá recaer, a estos efectos, en ambos cónyuges, siendo suficiente que uno de ellos reúna los requisitos indicados en el apartado anterior.

3. Las explotaciones agrarias que pertenezcan a una comunidad hereditaria y sobre las que exista pacto de indivisión por un período mínimo de seis años, se considerarán, a estos efectos, como explotaciones familiares prioritarias, siempre que la explotación y al menos uno de los partícipes en la comunidad cumpla los requisitos señalados en el apartado 1 de este artículo.

El período de indivisión se contará a partir de la calificación de la explotación como prioritaria.

Artículo 5. Explotaciones asociativas.

Con carácter general, para que una explotación asociativa tenga la consideración de prioritaria, se requiere que la explotación posibilite la ocupación de, al menos, una unidad de trabajo agrario, y su renta unitaria de trabajo sea igual o superior al 40 por 100 de la renta de referencia e inferior al 120 por 100 de ésta. Asimismo deberá responder a cualquiera de las alternativas siguientes:

a) Ser Sociedad Cooperativa de explotación comunitaria de la tierra o de trabajo asociado dentro de la actividad agraria.

b) Ser sociedad bajo cualquiera de las restantes formas jurídicas de las contempladas en el artículo 6, que cumpla los requisitos señalados en uno de los dos guiones siguientes:

— que al menos el 50 por 100 de los socios sean agricultores profesionales.

— que los dos tercios de los socios que sean responsables de la gestión y administración, cumplan los requisitos exigidos al agricultor profesional en cuanto a dedicación de trabajo y procedencia de rentas, referidos a la explotación asociativa, así como los señalados en las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo anterior, y que dos tercios, al menos, del volumen de trabajo desarrollado en la explotación sea aportado por socios que cumplan los requisitos anteriormente señalados.

c) Ser explotación asociativa que se constituya agrupando, al menos, dos terceras partes de la superficie de la explotación bajo una sola linde, sin que la superficie aportada por un solo socio supere el 40 por 100 de la superficie total de la explotación. En estas explotaciones asociativas, al menos un socio debe ser agricultor a título principal y cumplir las restantes exigencias establecidas en el apartado 1 del artículo 4 para los titulares de explotaciones familiares.

Artículo 6. Formas jurídicas de las explotaciones asociativas.

Las explotaciones asociativas prioritarias deberán adoptar alguna de las formas jurídicas siguientes:

a) Sociedades Cooperativas o Sociedades Agrarias de Transformación.

b) Sociedades civiles, laborales u otras mercantiles que, en caso de que sean anónimas, sus acciones deberán ser nominativas, siempre que más del 50 por 100 del capital social, de existir éste, pertenezca a socios que sean agricultores profesionales. Estas sociedades tendrán por objeto exclusivo el ejercicio de la actividad agraria en la explotación de la que sean titulares.

Artículo 7. Situaciones de preferencia.

1. Los titulares de explotaciones prioritarias tendrán un trato preferente en los siguientes supuestos:

a) En la adjudicación de superficies agrarias realizadas por las Administraciones Públicas.

b) En las contrataciones de seguros agrarios subvencionadas con fondos públicos.

c) En el acceso a las actividades formativas organizadas o financiadas por las Administraciones Públicas para mejorar la cualificación profesional de los agricultores.

d) En la concesión de las ayudas establecidas para la mejora de las estructuras agrarias de producción, sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa comunitaria. A estos efectos se podrán establecer criterios de modulación en función de la dedicación y la renta de los titulares, así como de la ubicación de las explotaciones.

e) En las ayudas incluídas en los programas de ordenación de producciones agrarias o de ámbito territorial específico, siempre que ello sea compatible con las finalidades de dichos programas.

f) En la asignación de las cuotas o derechos integrados en las reservas nacionales, constituidas en aplicación o desarrollo de la normativa reguladora de las correspondientes organizaciones comunes de mercado, siempre en concordancia con las condiciones establecidas, al efecto, en dichas normas.

2. Las anteriores situaciones de preferencia estarán condicionadas a que la explotación no pierda la condi-

ción de prioritaria por la aplicación de las medidas consideradas en el apartado anterior y se harán extensivas a los titulares de explotaciones que, mediante la aplicación de estas medidas, alcancen la consideración de prioritarias.

CAPITULO II (antes III)

Beneficios fiscales

Artículo 8 (antes 15). Préstamos.

Quedarán exentas del gravamen gradual de Actos Jurídicos Documentados, las primeras copias de escrituras públicas que documenten la constitución, modificación o cancelación de préstamos hipotecarios sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando los mismos se concedan a los titulares de explotaciones prioritarias para la realización del plan de mejora y a los titulares de explotaciones que no siendo prioritarias alcancen dicha consideración mediante adquisiciones financiadas con el préstamo.

Artículo 9 (antes 16). Transmisión de la explotación.

1. La transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, «inter vivos» o «mortis causa», del pleno dominio o del usufructo vitalicio de una explotación agraria en su integridad, en favor o por el titular de otra explotación que sea prioritaria o que alcance esta consideración como consecuencia de la adquisición gozará de una reducción del 90 por 100 de la base imponible del impuesto que grave la transmisión o adquisición de la explotación o de sus elementos integrantes, siempre que, como consecuencia de dicha transmisión, no se altere la condición de prioritaria de la explotación del adquirente. La transmisión de la explotación deberá realizarse en escritura pública.

A los efectos indicados en el párrafo anterior se entenderá que hay transmisión de una explotación agraria en su integridad, aun cuando se excluya la vivienda.

2. Para que se proceda a dicha reducción, se hará constar en la escritura pública de adquisición, y en el Registro de la Propiedad, si las fincas transmitidas estuviesen inscritas en el mismo, que si las fincas adquiridas fuesen enajenadas, arrendadas o cedidas durante el plazo de los cinco años siguientes, deberá justificarse previamente el pago del impuesto correspondiente, o de la parte del mismo, que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora, excepción hecha de los supuestos de fuerza mayor que pudieran establecerse.

3. La continuación de la explotación por el cónyuge superviviente en ningún caso se considerará sujeta a tributación.

Artículo 10 (antes 17). Explotación bajo una sola linde.

1. La transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, «inter vivos» o «mortis causa» de terrenos, que se realicen para completar bajo una sola linde la superficie suficiente para constituir una explotación prioritaria, estará exenta del impuesto que grave la transmisión o adquisición, siempre que en el documento público de adquisición se haga constar la indivisibilidad de la finca resultante durante el plazo de cinco años.

2. Cuando la transmisión o adquisición de los terrenos se realicen por los titulares de explotaciones agrarias con la pretensión de completar bajo una sola linde el 50 por 100, al menos, de la superficie de una explotación cuya renta unitaria de trabajo esté dentro de los límites establecidos en la presente Ley a efectos de concesión de beneficios fiscales para las explotaciones prioritarias, se aplicará una reducción del 50 por 100 en la base imponible del impuesto que grave la transmisión o adquisición. La aplicación de la reducción estará sujeta a las mismas exigencias de indivisibilidad y documento público de adquisición señalados en el apartado anterior.

Artículo 11 (antes 18). Transmisión parcial de explotaciones y de fincas rústicas.

En la transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, «inter vivos» o «mortis causa», del pleno dominio o del usufructo vitalicio de una finca rústica o de parte de una explotación agraria, en favor de un titular de explotación prioritaria que no pierda o que alcance esta condición como consecuencia de la adquisición, se aplicará una reducción del 75 por 100 en la base imponible de los impuestos que gravan la transmisión o adquisición. Para la aplicación del beneficio deberá realizarse la transmisión en escritura pública, y será de aplicación lo establecido en el apartado 2 del artículo 9.

Artículo 12 (antes 19). Permutas de fincas rústicas.

Estarán exentas en la modalidad de «transmisiones patrimoniales onerosas» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o en el Impuesto sobre el Valor Añadido, las permutas voluntarias de fincas rústicas autorizadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o por los organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia, siempre que, al menos, uno de los permutantes sea titular de una explotación agraria prioritaria y la permuta, que deberá realizarse en escritura pública, tenga alguna de las siguientes finalidades:

- a) Eliminar parcelas enclavadas, entendiéndose por tales las así consideradas en la legislación general de reforma y desarrollo agrario.
- b) Suprimir servidumbres de paso.
- c) Reestructurar las explotaciones agrarias, incluyendo en este supuesto las permutas múltiples que se produzcan para realizar una concentración parcelaria de carácter privado.

Artículo 13 (antes 20). Inscripción registral.

Los expedientes de dominio, actas de notoriedad y cualquier otro procedimiento para inmatricular o para reanudar el tracto registral interrumpido en el Registro de la Propiedad de fincas integradas en una explotación prioritaria o de las que con su integración permitan constituirla, gozarán de una reducción del 90 por 100 en la base imponible de la modalidad de «transmisiones patrimoniales onerosas» del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Artículo 14 (antes 21). Amortización del inmovilizado material de las explotaciones asociativas.

En el caso de explotaciones asociativas prioritarias gozarán de libertad de amortización los elementos de inmovilizado material afectos a la realización de sus actividades agrarias, adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la fecha de su reconocimiento como explotación prioritaria. Para las explotaciones asociativas prioritarias que sean Cooperativas agrarias especialmente protegidas, según la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, la bonificación de la cuota íntegra en el Impuesto de Sociedades será del 80 por 100.

Artículo 15 (antes 23). Acreditación.

La condición de explotación prioritaria, a los efectos de la obtención de los beneficios fiscales establecidos en esta Ley, se acreditará mediante certificación expedida por el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma respectiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

CAPITULO III (antes IV)

Catálogo de explotaciones prioritarias

Artículo 16 (antes 24). Creación y actualización.

1. En el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se llevará un Catálogo General de Explotaciones Prioritarias, de carácter público, en el que constarán las explotaciones de esa naturaleza sobre las que

se haya recibido la correspondiente comunicación de las Comunidades Autónomas.

2. Las Comunidades Autónomas deberán comunicar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la periodicidad y en los términos que se establezcan reglamentariamente, las explotaciones radicadas en su territorio que cumplan los requisitos establecidos en esta Ley para ser consideradas prioritarias, tanto si sus titulares se han acogido a las ayudas destinadas al sector agrario como si no lo han hecho, siempre que, en este último caso, acrediten que reúnen aquellos requisitos.

3. Los titulares de explotaciones prioritarias incluidas en el Catálogo, vendrán obligados a comunicar al órgano competente de la Comunidad Autónoma los cambios que pudieran afectar a su condición de explotaciones prioritarias cuando se produzcan.

4. La inclusión en el Catálogo o la certificación de la Comunidad Autónoma, serán los medios para acreditar que la explotación tiene carácter de prioritaria, a los efectos establecidos en esta Ley.

CAPITULO IV (antes V)

Agricultores jóvenes

Artículo 17 (antes 25). Primera instalación.

1. Con la finalidad de promover el rejuvenecimiento de la población activa agraria se concederán ayudas a los agricultores jóvenes que se instalen por primera vez en una explotación agraria prioritaria como titular, cotitular o socio de la misma. También se considerará como primera instalación la realizada por un agricultor joven que habiéndose instalado anteriormente a tiempo parcial pase a ser titular de una explotación prioritaria.

2. Cuando un agricultor joven sea cotitular de una explotación agraria, bastará que reúna personalmente los requisitos que se exigen al titular de las explotaciones prioritarias para que aquélla alcance tal consideración.

3. Será criterio de consideración preferente en la concesión de las ayudas para la primera instalación de agricultores jóvenes, el acceso a la misma bajo el régimen de cotitularidad señalado en el artículo siguiente.

Artículo 18 (antes 26). Acceso a la cotitularidad.

1. Para que un agricultor joven reúna la condición de cotitular de una explotación, deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el titular y el agricultor joven acuerden que éste compartirá las responsabilidades gerenciales, los resultados económicos de la explotación, los riesgos inherentes a su gestión y las inversiones que en ella se re-

alicen, en una proporción mínima del 50 por 100. Dicho acuerdo deberá tener una duración mínima de seis años.

b) Que el titular transmita al agricultor joven al menos un tercio de su propiedad en los elementos que integran su explotación, cuyo uso y aprovechamiento continuarán integrados en la misma.

2. Los acuerdos previstos en las letras a) y b) del apartado anterior deberán formalizarse en escritura pública, y la transmisión a la que se refiere la letra b) deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad, si están previamente inscritas las fincas a favor del titular.

Artículo 19 (antes 27). Concesión de las ayudas.

Para la concesión de ayudas a la instalación de agricultores jóvenes, conforme a lo establecido en el artículo 17, se exigirán los siguientes requisitos:

a) Que el agricultor joven posea una capacitación profesional suficiente en el momento de su instalación o se comprometa a adquirirla en el plazo de dos años.

b) Que la explotación requiera un volumen de trabajo equivalente, como mínimo, a una unidad de trabajo agrario, o, en su defecto, que el agricultor joven que se instale se comprometa a que la explotación alcance dicho volumen en un plazo máximo de dos años desde su instalación.

c) Que el agricultor joven que se instale cumpla el requisito de residencia, en los términos establecidos en la letra e) del apartado 1 del artículo 4.

Artículo 20 (antes 30). Beneficios fiscales especiales.

1. La transmisión o adquisición por cualquier título, oneroso o lucrativo, «inter vivos» o «mortis causa», del pleno dominio o del usufructo vitalicio de una explotación agraria o de parte de la misma o de una finca rústica, en favor de un agricultor joven o un asalariado agrario para su primera instalación en una explotación prioritaria, estará exenta del impuesto que grave la transmisión o adquisición de que se trate.

2. Las reducciones en la base imponible establecidas en los artículos 9 y 11 se incrementarán en diez puntos porcentuales, en cada caso, si el adquirente es, además, un agricultor joven o un asalariado agrario y la transmisión o adquisición se realiza durante los cinco años siguientes a su primera instalación.

3. En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2 de este artículo, será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9.

4. Quedarán exentas del gravamen de Actos Jurídicos Documentados, las primeras copias de escrituras públicas que documenten la constitución, modificación o cancelación de préstamos hipotecarios sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando los mismos se concedan a agricultores jóvenes o asalariados agrarios

para facilitar su primera instalación de una explotación prioritaria.

5. Los agricultores jóvenes o asalariados agrarios que determinen el rendimiento neto de su actividad mediante el método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, podrán reducir el correspondiente a su actividad agraria en un 25 por 100 durante los períodos impositivos cerrados durante los cinco años siguientes a su primera instalación como titulares de una explotación prioritaria, realizada al amparo de lo previsto en este Capítulo, siempre que acrediten la realización de un plan de mejora de la explotación.

El rendimiento neto a que se refiere el párrafo anterior será el resultante exclusivamente de la aplicación de las normas que regulan el método de estimación objetiva.

La reducción prevista en este apartado se tendrá en cuenta a efectos de determinar la cuantía de los pagos fraccionados que deban efectuarse.

CAPITULO V (antes VI)

Régimen sancionador

Artículo 21 (antes 32). Infracciones y sanciones.

1. Las infracciones administrativas y sanciones, respecto de las subvenciones que se concedan con arreglo a lo establecido en esta Ley, se regirán por lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley General Presupuestaria o por las normas específicas que tengan establecidas cada Comunidad Autónoma.

2. Respecto de los beneficios fiscales establecidos en esta Ley, serán de aplicación las infracciones y sanciones recogidas en el Capítulo VI del Título II de la Ley General Tributaria.

3. La aplicación de lo establecido en los apartados anteriores corresponderá al Departamento Ministerial o, en su caso, a la Consejería competente de cada Comunidad Autónoma.

4. El infractor titular de la explotación, podrá además ser sancionado con la baja temporal o definitiva de su explotación en el Catálogo General de Explotaciones Prioritarias, o en los catálogos o registros equivalentes que puedan crear las Comunidades Autónomas. La sanción de baja definitiva en el Catálogo sólo podrá imponerse por la comisión de infracciones muy graves.

CAPITULO VI (antes VII)

Financiación de las ayudas

Artículo 22 (antes 33). Convenios de colaboración.

Las ayudas a que se refiere esta Ley podrán ser financiadas por la Administración General del Estado y

por las de las Comunidades Autónomas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios de colaboración para la cofinanciación de dichas ayudas, con arreglo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

TITULO II

REGIMEN DE UNIDADES MINIMAS DE CULTIVO

Artículo 23 (antes 34). Determinación.

1. A los efectos de esta Ley se entiende por unidad mínima de cultivo, la superficie suficiente que debe tener una finca rústica para que las labores fundamentales de su cultivo, utilizando los medios normales y técnicos de producción, pueda llevarse a cabo con un rendimiento satisfactorio, teniendo en cuenta las características socioeconómicas de la agricultura en la comarca o zona.

2. Corresponde a las Comunidades Autónomas determinar la extensión de la unidad mínima de cultivo para secano y para regadío en los distintos municipios, zonas o comarcas de su ámbito territorial.

Artículo 24 (antes 35). Indivisión.

1. La división o segregación de una finca rústica sólo será válida cuando no dé lugar a parcelas de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo.

2. Serán nulos y no producirán efecto entre las partes ni con relación a tercero, los actos o negocios jurídicos, sean o no de origen voluntario, por cuya virtud se produzca la división de dichas fincas, contraviniendo lo dispuesto en el apartado anterior.

3. La partición de herencia se realizará teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 1 de este artículo, aun en contra de lo dispuesto por el testador aplicando las reglas contenidas en el Código Civil sobre las cosas indivisibles por naturaleza o por ley y sobre la adjudicación de las mismas a falta de voluntad expresa del testador o de convenio entre los herederos.

Artículo 25 (antes 36). Excepciones.

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior se permite la división o segregación en los siguientes supuestos:

a) Si se trata de cualquier clase de disposición en favor de propietarios de fincas colindantes, siempre que como consecuencia de la división o segregación, tanto la finca que se divide o segrega como la colindante, no

resulte de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo.

b) Si la porción segregada se destina de modo efectivo, dentro del año siguiente a cualquier tipo de edificación o construcción permanente, a fines industriales o a otros de carácter no agrario, siempre que se haya obtenido la licencia prevista en la legislación urbanística y posteriormente se acredite la finalización de la edificación o construcción, en el plazo que se establezca en la correspondiente licencia, de conformidad con dicha legislación.

A los efectos del artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, no se entenderá vulnerada la legislación agraria, cuando la transmisión de la propiedad, división o segregación tenga el destino previsto en este apartado.

c) Si es consecuencia del ejercicio del derecho de acceso a la propiedad establecido en la legislación especial de arrendamientos rústicos.

d) Si se produce por causa de expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Expropiación Forzosa.

Artículo 26 (antes 37). Inscripción de fincas rústicas.

1. En toda inscripción de finca rústica en el Registro de la Propiedad se expresará si es de secano o de regadío, su extensión superficial, y que sólo puede ser susceptible de división o segregación respetando la extensión de la unidad mínima de cultivo, de acuerdo con lo establecido en el presente título.

2. La inexactitud de aquellos datos no puede favorecer a la parte que ocasionó la falsedad ni enervar los derechos establecidos en este título, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

Artículo 27 (antes 38). Retracto.

1. Tendrán el derecho de retracto los propietarios de fincas colindantes que sean titulares de explotaciones prioritarias, cuando se trate de la venta de una finca rústica de superficie inferior al doble de la unidad mínima de cultivo.

2. Si fueren varios colindantes, será preferido el dueño de la finca que con la adquisición iguale o supere la extensión de la unidad mínima de cultivo. Si más de un colindante cumple esta condición tendrá preferencia el dueño de la finca de menor extensión.

3. Cuando ninguna de las fincas colindantes iguale o supere como consecuencia de la adquisición la unidad mínima de cultivo, será preferido el dueño de la finca de mayor extensión.

4. El plazo para ejercitar este derecho de retracto será el de un año contado desde la inscripción en el Registro de la Propiedad salvo que antes se notifique fehacientemente.

cientemente a los propietarios de las fincas colindantes la venta de la finca, en cuyo caso el plazo será de sesenta días contados desde la notificación.

5. El propietario colindante que ejercite el derecho de retracto no podrá enajenar la finca retraída durante el plazo de seis años, a contar desde su adquisición.

TITULO III

ARRENDAMIENTOS RUSTICOS

Artículo 28 (antes 39). Duración y supresión de prórrogas legales.

1. Los contratos de arrendamientos rústicos a los que se refiere la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, que se celebren a partir de la entrada en vigor de la presente Ley tendrán una duración mínima de cinco años. El arrendador podrá recuperar la finca al término del plazo contractual, sin sujeción a ningún requisito o compromiso, salvo el de notificarlo fehacientemente al arrendatario, al menos, con un año de antelación.

2. Si el arrendador no ha recobrado la finca, conforme a lo establecido en el apartado anterior, se entenderá el contrato tácitamente prorrogado por tres años y así sucesivamente, pudiendo ejercitar al término de cada prórroga, el derecho de recuperación, previa la notificación establecida.

3. El arrendatario podrá dar por extinguido el contrato al término de cada año agrícola, notificándolo al arrendador con un año de antelación.

4. Dichos contratos, salvo lo dispuesto en los apartados anteriores, se regularán por las disposiciones vigentes sobre arrendamientos rústicos.

Artículo 29 (antes 40). Incentivos a los arrendamientos de mayor duración.

1. En función de la evolución del mercado de la tierra, el Gobierno podrá establecer incentivos en forma de ayuda económica anual a los propietarios que celebren contratos de arrendamiento de una duración igual o superior a ocho años, siempre que mediante el arrendamiento la explotación de la que sea titular el arrendatario alcance o mantenga la condición de prioritaria. La ayuda anual se mantendrá por un máximo de ocho años mientras el arrendatario sea titular de la explotación prioritaria y esté en vigor el contrato de arrendamiento.

2. La ayuda económica establecida en el apartado 1 del presente artículo, no podrá concederse cuando se trate de los arrendamientos comprendidos en los números 1º y 2º del artículo 6 de la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Legislación básica.

Tienen el carácter de legislación básica en virtud de lo previsto en el artículo 149.1.13ª de la Constitución los siguientes preceptos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, la Disposición Final Segunda, en lo que se refiere a la modificación que se introduce en el artículo 28 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y Disposición Final Tercera.

Segunda. Legislación de aplicación plena.

Son de aplicación plena en virtud de lo dispuesto en el artículo 149. 1. 8ª de la Constitución los siguientes preceptos: 24, 25, 26, 27 y 28, y las disposiciones finales primera y segunda, y se aplicarán en defecto de las normas civiles, forales o especiales, allí donde existan, dictadas por las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus competencias estatutarias en materia de Derecho civil.

Igualmente son de aplicación plena los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 20, sin perjuicio de lo establecido en el Concierto aplicable a los territorios históricos del País Vasco conforme a la Ley 12/1981, de 13 de mayo, y en el Convenio Económico aplicable a la Comunidad Foral de Navarra con arreglo a la Ley 28/1990 de 26 de diciembre.

Tercera. Supresión de la cotización empresarial por jornadas teóricas.

Con efectos desde el día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente Ley, se introducen las siguientes modificaciones respecto a la cotización del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social:

a) Queda suprimida la cotización empresarial por jornadas teóricas.

b) La cotización empresarial por jornadas reales se obtendrá aplicando a la base de cotización correspondiente a cada trabajador, en función del grupo de cotización en que esté encuadrado, el 15,5 por 100.

c) La base de cotización de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social queda fijada en 77.748 pesetas al mes.

Cuarta (Nueva). Bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para las explotaciones forestales.

El primer párrafo de la letra c) del artículo 64 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales queda redactado de la siguiente forma:

«Los montes poblados con especies de crecimiento lento de titularidad pública o privada. Esta exención se refiere a las especies de crecimiento lento mencionados en los anexos 1, 2 y 3 del Real Decreto 378/1993, de 12 de marzo; cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, y aquella parte del monte poblada por las mismas, siempre y cuando la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie que se trate.».

Quinta (Nueva). Bonificaciones fiscales en la transmisión de superficies rústicas de dedicación forestal.

En las transmisiones «mortis causa» y en las donaciones «inter vivos» equiparables de superficies rústicas de dedicación forestal, tanto en pleno dominio como en nuda propiedad, se practicará una reducción en la base imponible del impuesto correspondiente, según la siguiente escala:

— Del 90% para superficies incluidas en Planes de Protección por razones de interés natural aprobados por el órgano competente de la comunidad autónoma, o en su caso, por el correspondiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

— Del 75% para superficies con un Plan de Ordenación forestal o un Plan Técnico de Gestión y Mejora Forestal, o figuras equivalentes de planificación forestal, aprobado por la Administración competente.

— Del 50% para las demás superficies rústicas de dedicación forestal, siempre que como consecuencia de dicha transmisión no se altere el carácter forestal del predio y no sea transferido por razón de inter vivos, arrendada o cedida su explotación por el adquirente, durante los cinco años siguientes al de la adquisición.

De la misma reducción gozará la extinción del usufructo que se hubiera reservado el transmitente.

Las bonificaciones fiscales reguladas en esta Disposición Adicional serán de aplicación, en la escala que corresponda, a la totalidad de la explotación agraria en la que la superficie de dedicación forestal sea superior al 80% de la superficie total de la explotación.

DISPOSICION TRANSITORIA

Unica.

Hasta el 31 de diciembre de 1998, podrán tener la consideración de prioritarias aquellas explotaciones agrarias familiares cuya renta unitaria de trabajo sea superior al 30 por 100 de la renta de referencia e inferior a ésta, tengan la posibilidad de ocupar, al menos, media unidad de trabajo agrario y reúnan los restantes requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 4.

DISPOSICION DEROGATORIA

Unica.

1. Quedan derogados la Ley 49/1981, de 24 de diciembre, del Estatuto de la Explotación Familiar Agraria y de los Agricultores Jóvenes, y el Título II del Libro Primero, el Título III del Libro Segundo y el Título IV del Libro Cuarto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, cuyo texto fue aprobado por Decreto 118/1973, de 12 de enero.

2. Queda derogado el artículo 44 del Texto Refundido de las Leyes 38/1966, de 31 de mayo, y 41/1970, de 22 de diciembre, por las que se establece y regula el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 2123/1971, de 23 de julio.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos.

Se modifica el artículo 15 y el último punto del primer párrafo del apartado 5 del artículo 121 de la Ley 83/1980, de 31 de diciembre, de Arrendamientos Rústicos, que quedarán redactados de la siguiente forma:

«Artículo 15

Se entiende por profesional de la agricultura a los efectos de esta Ley:

a) La persona mayor de edad o emancipada que se dedique o vaya a dedicarse a actividades de carácter agrario y se ocupe de manera efectiva y directa de la explotación, como agricultor profesional de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del artículo 2 de la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

b) Las Sociedades Cooperativas agrarias de explotación comunitaria de la tierra o de trabajo asociado dentro de la actividad agraria.

c) Las Sociedades Agrarias de Transformación u otras sociedades civiles, laborales u otras mercantiles, que en caso de que sean anónimas, sus acciones deberán ser nominativas y tengan por objeto exclusivo, conforme a sus Estatutos, el ejercicio de la actividad agraria.

d) Las Entidades, u Organismos de las Administraciones Públicas que estén facultados conforme a sus normas reguladoras para la explotación o subarriendo de fincas rústicas».

«Artículo 121.5, último punto del primer párrafo

La determinación del ámbito de las Juntas Arbitrales corresponde a las Comunidades Autónomas.

Segunda. Modificación de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

Se modifican el apartado 3 del artículo 28, y los artículos 32, y 35 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, cuyo texto fue aprobado por Decreto 118/1973, de 12 de enero, quedando redactados de la siguiente forma:

«Artículo 28

3. No será necesaria autorización para transmitir «inter vivos» la explotación en su integridad o gravar todo o parte de cualquiera de los elementos inmobiliarios que integran la misma, una vez que hayan transcurrido ocho años, a contar desde la fecha del otorgamiento de la escritura pública de transmisión de su propiedad, siempre que se haya satisfecho la totalidad del precio que pudiera haber quedado aplazado. Los cambios de titularidad deberán hacerse constar en escritura pública.»

«Artículo 32

1. Por muerte del concesionario se transmitirá la concesión al cónyuge viudo no separado legalmente o de hecho, siempre que esta última situación se demuestre fehacientemente y, en su defecto, a uno de los hijos o descendientes que sea agricultor.

2. Cuando existieren varios descendientes agricultores, sucederá en la concesión el que haya sido designado por el concesionario en testamento y, en su defecto, el elegido de común acuerdo entre ellos. Si no hubiese acuerdo se transmitirá al que viniere cooperando habitualmente en el cultivo de la explotación, y si fueren más de uno, será preferido el que hubiere cooperado durante más tiempo.

3. A los efectos de la partición de la herencia se considerará que sólo forma parte del caudal relicto por el concesionario el importe de lo que se determina en el apartado 3 del artículo 33.

4. En defecto de cónyuge viudo no separado legalmente o de hecho, ni hijos, ni descendientes, la concesión se transmitirá al designado por el concesionario en su testamento o al que fuere judicial o notarialmente declarado heredero, si fuere agricultor, y si lo fueren varios, se observará el orden de preferencia establecido en el apartado 2 de este artículo.

5. En todo caso deberá practicarse la notificación de la transmisión, a la que hace referencia el apartado 2 del artículo 31».

«Artículo 35

Por muerte del propietario la explotación no podrá ser objeto de división, y la transmisión mortis causa de la misma se ajustará a lo dispuesto en el Código Civil o en las disposiciones de igual carácter en las Comunidades Autónomas que sean de aplicación».

Tercera. Territorios con insuficiencias estructurales.

1. Atendiendo a la especial incidencia de las insuficiencias estructurales agrarias en determinados territorios, a su menor nivel de desarrollo o a la especificidad de su agricultura, el Gobierno, a propuesta de las Comunidades Autónomas, podrá rebajar el límite inferior de la renta unitaria de trabajo en relación con la renta de referencia a todos los efectos contemplados en la presente Ley para las explotaciones prioritarias.

2. Cuando en una Comunidad Autónoma las explotaciones que cumplen los requisitos exigidos a las explotaciones familiares en el apartado 1 del artículo 4, excepto el de que la renta unitaria de trabajo alcance el 40 por 100, al menos, de la renta de referencia, representen más de la cuarta parte del total de las explotaciones familiares prioritarias, se rebajará el indicado porcentaje del 40 por 100 de la renta de referencia, al 30 por 100.

Cuarta. Arancel especial de Notarios y Registradores de la Propiedad.

A propuesta del Ministerio de Justicia, previo informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a los efectos de esta Ley, el Gobierno, mediante Real Decreto, dictará las normas de reducción y fijación de bases que deban ser aplicadas a las actuaciones de Notarios y Registradores de la Propiedad.

Quinta. Desarrollo de la Ley.

Por el Gobierno y por los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de Trabajo y Seguridad Social se adoptarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones de carácter general necesarias para la aplicación y desarrollo de lo previsto en la presente Ley.

Sexta. Determinación periódica de indicadores.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realizará periódicamente las siguientes determinaciones:

1. El número de horas correspondiente a la unidad de trabajo agrario a los efectos de cómputo que se contemplan en la presente Ley.

2. La cuantía de la renta de referencia de conformidad con lo previsto en el apartado 10 del artículo 2. de esta Ley.

3. El sistema de estimación objetiva de los parámetros utilizados en el cálculo de la renta total del titular y de la renta unitaria de trabajo así como su validez temporal, en orden a la calificación de las explotaciones como prioritarias a los efectos establecidos en esta Ley.